



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ

---

Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veinte (2020)

**RADICACIÓN:** 11001-33-35-026-2020-00188  
**PROCESO:** EJECUTIVO  
**EJECUTANTE:** DOMINGO ADONAY VELASQUEZ REYES  
**EJECUTADA:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE  
GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP  
**ORDINARIO:** 110013335026201300019-00

La parte ejecutante, a través de apoderado judicial, ha solicitado a este juzgado, que previo los tramites de un proceso ejecutivo, se libre orden de pago a su favor y en contra del Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social Ugpp, con el fin de obtener el pago de los intereses moratorios derivados de la sentencia judicial proferida en el proceso con radicado 2013-00019, por este estrado judicial y que fuera confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la suma total de **DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$2.697.742) M/CTE.**

Así las cosas, de conformidad con lo allegado al plenario, debe el Despacho resolver si es viable o no librar mandamiento de pago en el presente asunto. Para el efecto se analizará lo siguiente:

**A. PRETENSIONES**

La activa solicita se libre mandamiento ejecutivo de pago de la siguiente manera:

*“1. Por la suma de SIESCIENTOS (sic) DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MLC(\$17.204.543), por concepto de intereses moratorios derivados de la Sentencia proferida por el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá de fecha 28 de abril de 2014, modificada por la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección segunda – Subsección C, de fecha 30 de septiembre de 2014, desde la fecha de ejecutoria de la sentencia (7 de octubre de 2014) hasta por los diez (10) primeros meses (7 de julio de 2015), liquidados a la tasa del DTF certificados por el Banco de la Republica, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 195 del C.P.A.C.A.*

2) *Por la suma de DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MLC (\$2.078.950), por concepto de intereses moratorios derivados de la Sentencia proferida por el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá de fecha 28 de abril de 2014, modificada por la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección segunda – Subsección C, de fecha 30 de septiembre de 2014, desde el día siguiente a los diez (10) primeros meses (8 de julio de 2015) hasta la fecha en que la Entidad realizó el pago del crédito judicial (25 de noviembre de 2015), liquidados a la tasa comercial certificado por la Superintendencia Financiera, de conformidad con lo establecido en el numeral 4° del artículo 195 del C.P.A.C.A.*

3) *Se ordene la indexación de las anteriores sumas desde el día siguiente en que se canceló el crédito judicial (26 de noviembre de 2015) hasta cuando quede en firma la liquidación del crédito dentro del presente asunto.*

4) *Se condene en costas a la demandada.”*

## **B. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA**

Destaca el abogado de la parte actora, que con base en las sentencias proferidas por este Despacho y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la UGPP no ha cumplido en su integridad las ordenes proferidas, en lo que tiene que ver con lo intereses moratorios, y los cuales la entidad demandada se ha negado pagar.

Manifiesta que, lo que se pretende es el pago de unas acreencias las cuales se encuentran debidamente reconocidas en las sentencias de primera y segunda instancia, así como, en el acto administrativo por medio del cual, la UGPP dio cumplimiento a la orden judicial.

Señala el Profesional del Derecho que, la obligación es clara, expresa y exigible, al tenor de lo dispuesto en los artículos 422 y siguientes del Código General del Proceso en concordancia con el numeral 1° del artículo 297 y ss. del C.P.A.C.A.

## **CONSIDERACIONES**

Como primera medida, el artículo 104 de la ley 1437 de 2011, indica en el numeral 6to ibídem, que esta Jurisdicción conocerá, entre otros, de “*Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.*”.

En este sentido, el artículo 297 del C.P.A.C.A., prevé:

**“Artículo 297. Título ejecutivo.** *Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:*

1. *Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. (...)*”

Ahora bien, teniendo en cuenta que, en la Jurisdicción Contencioso Administrativo, tiene plena vigencia todo el articulado de la Ley 1564 de 2012, por la cual se expidió el Código General del Proceso<sup>1</sup>, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los aspectos no regulados en el mismo se seguirán las reglas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso).

Conforme con lo anterior, se observa que el artículo 422 del Código General del Proceso, en relación con las calidades particulares del título ejecutivo, determinó frente a providencias judiciales lo siguiente:

**“Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles** que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las **que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial**, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”

Así las cosas, de conformidad con los artículos reseñados, el proceso ejecutivo tendría varios derroteros para tener en cuenta en casos como el presente:

**1. Solicitud:** A través de memorial radicado por el abogado LUIS ALFREDO ROJAS LEÓN, en representación del señor Domingo Adonay Velásquez Reyes, este solicitó al juzgado que se libre mandamiento ejecutivo en contra de la UGPP, con el fin de obtener el pago de los intereses ordenados en las sentencias proferidas por este Despacho y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Luego entonces, se encuentra satisfecho el requisito de solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo.

Ahora bien, adicional a la solicitud, se hace preciso analizar si la misma fue elevada dentro del término que la Ley que otorga para ello.

---

<sup>1</sup> CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. Consejero Ponente: ENRIQUE GIL BOTERO. Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 05001233100020110046201 (44.544). Demandante: Jerlis Antonio Mercado Castillo y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional. Referencia: Acción de Reparación Directa.

Al respecto, el inciso K del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma vigente al momento de la expedición de la sentencia, frente a la oportunidad de presentación de la acción ejecutiva determinó:

***“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:***

*(...)*

*k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, **de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia** y de laudos arbitrales contractuales estatales, **el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida.***

*(...)*

Negrilla y subraya fuera de texto original

A su vez el artículo 192 del mismo ordenamiento dispuso en su inciso segundo establece:

***“Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas.***

*(...)*

***Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.*** Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada. *(...)*

Negrilla y subraya fuera de texto original

Así las cosas, en principio el ejecutante contaba con un término de cinco años a partir de la exigibilidad del derecho, para la presentación de la demanda ejecutiva, es decir dicho término inicia luego de vencidos los 10 meses que tiene la entidad para realizar el pago.

En el plenario se constata que el ejecutado es la **Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP**.

En este sentido, en el plenario se evidencia que la demanda fue radicada ante la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados Administrativos el 28 de noviembre de 2019 (*fl.2º expediente digital*), circunstancia por la cual en los términos expuestos por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente demanda se encuentra presentada dentro del término legal, teniendo en cuenta que la ejecutoria de la sentencia fue del 7 de octubre de 2014.

Por lo anterior, es claro que la demanda ejecutiva fue presentada dentro del término de Ley.

**2. Título Ejecutivo:** En el presente asunto, el título ejecutivo lo constituyen varias actuaciones a saber:

Por un lado, se encuentran las sentencias proferidas por este Juzgado el 28 de abril de 2014 y por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección “C”, M.P. Dra. Amparo Oviedo Pinto, el 30 de septiembre de 2014 (*fls. 14 a 42 del expediente digital*).

Seguidamente, debe tenerse como tal la Resolución RDP 026540 del 30 de junio de 2015, emanada por la UGPP, en virtud de la cual se dio cumplimiento a los fallos antes aludidos, aunque de manera parcial en consideración de la parte ejecutante (*fls. 47-55 del expediente digital*).

De la misma manera, obra en el plenario la Resolución RDP 033575 del 18 de agosto de 2015, por medio del cual ordena el pago de unos intereses moratorios; sin embargo, en dicho acto administrativo no se establece el monto a pagar, así como tampoco, el periodo liquidado por dicho concepto.

Conforme con lo anterior, el Despacho considera que las sentencias proferidas, conjuntamente con los actos de ejecución y la liquidación que efectuó la UGPP para el cumplimiento de la sentencia, configuran un título ejecutivo, por darse cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 422 del Código General del Proceso, en razón a que la decisión se encuentra debidamente ejecutoriada y del contenido de la misma se desprende la obligación hoy reclamada por la ejecutante, que corresponde a la liquidación de los intereses moratorios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA, siendo una de las órdenes impartidas por este estrado judicial y que no fue cumplida por el ente administrativo ejecutado.

En este sentido, se observa que el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma aplicable para el presente asunto, en relación con la efectividad de las condenas contra entidades públicas, dispone:

**“Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas.** Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.

*Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.*

*Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código.*

Así mismo, sobre la incidencia del artículo 192 del código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en el cumplimiento de las sentencias condenatorias por parte de las entidades estatales, el H. Consejo De Estado - Sala De Consulta y Servicio Civil - Consejero Ponente: Álvaro Amén Vargas, en providencia del veintinueve (29) de abril de dos mil catorce (2014), manifestó:

(...)

**" 4. El pago de sentencias y conciliaciones y la tasa aplicable en materia de intereses de mora según la Ley 1437 de 2011**

*En el Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso Administrativo, expedido mediante la Ley 1437 de 2011, en los artículos 192, 194 y 195 del Título V, referente a la demanda y proceso contencioso administrativo, Capítulo VI, correspondiente a la sentencia, teniendo en cuenta que el compromiso de las entidades públicas de honrar los créditos judicialmente reconocidos en sentencias y providencias en firme no respondía en debida forma a los principios de eficiencia, economía y eficacia, se replanteó la regulación para el cumplimiento de las sentencias y conciliaciones por parte de las entidades públicas, así:*

**a) Del cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas**

*El artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, en relación con el cumplimiento de las sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas, preceptúa:*

**"ARTÍCULO 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas.** Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento.

**Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia.** Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.

**Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que Impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código.**

*Cuando el fallo de primera instancia sea de carácter condenatorio, y contra el mismo se interponga el recurso de apelación, el juez o magistrado deberá citar a audiencia de conciliación, que deberá celebrarse antes de la concesión del recurso. La asistencia a esta audiencia será obligatoria si el apelante no asiste a la audiencia, se declarará desierto el recurso.*

**Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud.**

*En asuntos de carácter laboral, cuando se condene al reintegro, si dentro del término de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la providencia que así lo disponga, éste no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado, en adelante cesará la causación de emolumentos de todo tipo.*

*El incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas con el reconocimiento y pago de créditos judicialmente reconocidos acarreará las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar.*

*Ejecutoriada la sentencia, para su cumplimiento, la Secretaría remitirá los oficios correspondientes."*

*La norma en síntesis regula los siguientes aspectos: **i) la forma como se materializa una condena cuando no implica el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero; ii) el plazo de diez meses para cumplir las condenas que impongan a entidades públicas el pago o devolución de una suma de dinero y su trámite contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia; iii) el momento a partir del cual la condena o conciliación extrajudicial devengará intereses moratorios, esto es, a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto aprobatorio del mecanismo alternativo de solución de conflictos; iv) la audiencia de conciliación a celebrar en el evento en que se profiera en primera instancia una sentencia condenatoria y esta sea apelada; v) la mora creditoris predicable a los beneficiarios cuando estos no acuden dentro del término de tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la respectiva providencia, a la entidad responsable para hacerla efectiva o no pudiere llevarse a cabo por causas imputables al interesado según el caso, eventos en los cuales cesará la causación de intereses moratorios y vi) las consecuencias del incumplimiento por parte de las autoridades de las disposiciones relacionadas con el reconocimiento y pago de créditos judicialmente reconocidos, esto es, la procedencia de las sanciones penales, disciplinarias, fiscales y patrimoniales a que haya lugar.***

*De otra parte, cabe observar que en relación con el cumplimiento de las condenas que no implican el pago o devolución de una suma de dinero, que es el primer aspecto regulado en el artículo precitado, **el nuevo código mantiene, en su artículo 192, una regla similar a la que preveía el Decreto Ley 01 de 1984 en su artículo 176. Estas normas presentan similitud en tres aspectos: i) el deber que se impone a las autoridades de cumplir con las condenas impuestas en su contra; ii) la orden según la cual la respectiva entidad condenada "adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento" y iii) el término de treinta (30) días para cumplir con las condenas.** Sin embargo, estas dos disposiciones no son idénticas, pues entre una y otra existe una diferencia importante, que consiste en que la norma del nuevo código establece claramente las tres circunstancias descritas para una sola especie de condenas, esto es, únicamente aquellas que no impliquen el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, mientras que la del Decreto Ley 01 de 1984 no hacía ninguna distinción, es decir, que podría entenderse que aplicaba a todo tipo de condenas.*

*Negrillas y subraya del Despacho*

Aunado de lo anterior, se tiene que el numeral 6° de la parte resolutive de la sentencia proferida por este estrado judicial y confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, impartió orden de cumplimiento a la misma en los términos señalados en los artículos 192 y ss del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

La decisión judicial de segundo grado fue debidamente notificada a las partes, quedando ejecutoriada la providencia el **7 de octubre de 2014**, tal y como se puede observar en la constancia de entrega de la primera copia que presta merito ejecutivo de las sentencias de primera y segunda instancia, expedida por la secretaria de turno, visible a folio 43 del plenario digital.

La Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP, profirió la Resolución **RDP 026540 del 30 de junio de 2015**, por medio de la cual dio cumplimiento a las sentencias ya identificadas, cuya decisión administrativa fue incluida en nómina en el mes de **noviembre de 2015**, y que en la misma no se reflejó el pago de los intereses moratorios (*fls. 57 expediente digital*).

Así mismo, se establece que la parte actora solicitó el cumplimiento de la providencia el 6 de noviembre de 2014<sup>2</sup>, es decir dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia y debido a ello fue expedido el acto administrativo de cumplimiento.

Adicionalmente se efectuó una liquidación por un valor de \$18.465.877.65, en el periodo comprendido entre el 26 de julio de 2008 al 31 de octubre de

---

<sup>2</sup> Folio 46 expediente digital



2015, por concepto de mesadas reliquidadas e indexación, sin que se viera reflejado el pago de intereses moratorios. (fls. 57 a 64 del expediente digital)

Por lo expuesto el Despacho librará mandamiento ejecutivo por los intereses moratorios insolutos.

Debe recordarse el contenido del enunciado normativo previsto en el artículo 1653 del Código Civil, que consagra lo siguiente:

***“Artículo 1653. Imputación del pago a intereses.** Si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital.*

*Si el acreedor otorga carta de pago del capital sin mencionar los intereses, se presumen éstos pagados.”*

Conforme a la normatividad referida, por regla general no puede imputarse pago a capital si aún no se han satisfecho los intereses, excepto que el acreedor los consienta y/o permita.

Acorde a ello, al presentarse la demanda ejecutiva por los intereses moratorios insolutos, lógico es concluir que el demandante está aceptando el pago a capital sin haberse cubierto los intereses; por lo mismo, al iniciarse el ejecutivo por los intereses moratorios y no por capital adeudado, no puede pretender el reconocimiento de indexación sobre los mismos, los cuales no están ordenados ni en el título, ni en disposición alguna que regule el proceso ejecutivo.

Ahora bien, se tiene que el monto solicitado por el ejecutante asciende a la suma de **\$2.697.742<sup>3</sup>**, conforme la liquidación expuesta por el ejecutante, **sin que necesariamente esta suma sea el valor por cancelar**, toda vez que ello está sujeto a la determinación precisa de la solicitud de cumplimiento a la sentencia, las excepciones propuestas por la demandada y a la liquidación del crédito.

A su vez se precisa, que los valores ordenados se encuentran comprendidos a partir del día siguiente hábil a la presentación de la solicitud del cumplimiento al fallo hasta la fecha en la que se hizo efectiva la inclusión en nómina el acto administrativo de cumplimiento a la misma, atendiendo el pago efectuado por la autoridad administrativa.

En mérito de lo expuesto, el Despacho en términos del artículo 430 del Código General del Proceso, dispondrá librar mandamiento ejecutivo a favor del señor **DOMINGO ADONAY VELASQUEZ REYES** y en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**

---

<sup>3</sup> Folio 3 expediente digital

por la suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$2.697.742) M/CTE**, por concepto de intereses moratorios adeudados por la entidad ejecutada.

En virtud de lo expuesto, el Despacho,

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** Librar mandamiento de pago por la vía ejecutiva, a favor del señor **DOMINGO ADONAY VELASQUEZ REYES** en contra de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP** por la suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$2.697.742) M/CTE**, por concepto de intereses moratorios reclamados en la presente ejecución.

**SEGUNDO:** Para los efectos del numeral 4° del artículo 171 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el artículo 2° del decreto 2867 de 1989, se fija la suma de **SESENTA MIL PESOS (\$60.000,00.) m/cte**, que deberá consignar la parte demandante en el término de 10 días contados a partir de la notificación de la presente providencia, **en la CUENTA CORRIENTE ÚNICA NACIONAL No. 3-082-00-00636-6 del Banco Agrario “CSJ-DERECHOS, ARANCELES, EMOLUMENTOS Y COSTOS -CUN”**.

**TERCERO:** Notifíquese esta providencia personalmente a la entidad demandada, **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL UGPP**, en los términos del artículo 199 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso.

**CUARTO:** Fíjese a la demandada, el término de cinco (5) días para que cumpla con la obligación de efectuar el pago de los intereses moratorios, reconocidos en la sentencia que constituyen título ejecutivo en el presente proceso (Artículo 431 C.G.P.).

**QUINTO:** Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, la demandada podrá proponer excepciones de mérito, siguiendo las reglas contenidas en el artículo 442 del C.G.P.

**SEXTO:** Notifíquese personalmente al señor representante del Ministerio Público, en los términos del artículo 199 del Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso.

**SÉPTIMO:** Notifíquese personalmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, en los términos del artículo 199 del Contencioso

Administrativo, modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso.

En el evento en que la agencia decida intervenir en el proceso, el mismo se suspenderá en los términos del artículo 611 del Código General del Proceso.

**OCTAVO:** Se reconoce personería jurídica al abogado **LUIS ALFREDO ROJAS LEÓN**, identificado con cédula de ciudadanía número 6.752.166 de Tunja y portador de la tarjeta profesional 54.264 del C. S. de la J., como apoderado principal del demandante, en los términos y para los fines del poder visible a folio 12 del expediente digital.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

20

**Firmado Por:**

**ANDRES  
QUINTERO  
JUEZ  
JUZGADO**



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD  
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en **ESTADO ELECTRÓNICO** notifico a las partes la providencia anterior hoy **16 DE SEPTIEMBRE DE 2020**, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)

  
**LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA  
SECRETARIA**

**JOSE  
GNECCO  
CIRCUITO  
026**

**ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-CUNDINAMARCA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:  
**0b3d2297c3fef31afa57d76f60e6c58fd897d8e40a52ca8ca497a03606c7b86**  
Documento generado en 15/09/2020 12:05:39 p.m.